

EI ‘AFFAIRE’ DE LA COMPAÑÍA AZUCARERA TUCUMANA (CAT), O LA PIRATERÍA MILITAR DEL RÉGIMEN DE ONGANÍA

Roberto Pucci
Universidad de Tucumán - Argentina

TESIS: LA DESTRUCCIÓN DEL “CAPITALISMO REALMENTE EXISTENTE” EN ARGENTINA

El 28 de junio de 1966 los militares tomaron el poder en Buenos Aires y, apenas dos meses después, desataron un verdadero cataclismo social y económico sobre la provincia de Tucumán al imponer el cierre compulsivo de siete fábricas azucareras. El ataque prosiguió en los años siguientes y determinó la desaparición de 11 de los 27 ingenios existentes, la eliminación de 10.000 pequeños productores cañeros y la reducción de unas 100.000 hectáreas de cultivos. La provincia fue sumergida en el marasmo más completo, su producción se contrajo un 25 por ciento y la desocupación arrojó al exilio interior a unos 200.000 tucumanos. Decenas de miles de zafreros santiagueños y catamarqueños que arribaban cada año para emplearse en la cosecha perdieron lo que representaba su fuente de trabajo principal, en una lenta agonía que puso fin, con el tiempo, a esta migración estacional que poblaba cada año los campos tucumanos. Al finalizar la década el territorio de Tucumán se asemejaba a un “paisaje después de la batalla”, sembrado de pueblos fantasma en los que sólo quedaban niños, mujeres y ancianos. Buenos Aires y el Litoral argentino tuvieron que experimentar la década menemista para conocer, recién, una situación parecida.

Ahora bien, en aquel escenario dantesco, la dictadura militar escogió como uno de sus blancos principales a la Compañía Azucarera Tucumana (CAT), cuatro de cuyos cinco ingenios fueron clausurados por el “plan” para Tucumán anunciado el 21 de agosto de 1966. El grupo CAT representaba el 20 por ciento de la producción azucarera tucumana, y al menos tres de sus fábricas se contaban entre las más eficientes de la actividad. La misma enormidad del despropósito, que amenazaba con provocar la guerra social (que nunca llegó, sin embargo, como no sea bajo la forma de desesperadas e ineficaces rebeldías, pero que alimentaría poco después los brotes de terrorismo y de contraterror criminal del Estado) obligó a Onganía a retroceder, permitiendo la reapertura de dos de sus ingenios, de modo que la CAT continuó operando con tres fábricas azucareras. A los pocos años, sin embargo, los funcionarios del PEN (Poder Ejecutivo Nacional) militar tramaron un complot para presentar a los directivos de la firma como autores de un escandaloso negociado, que la prensa de todo el país propaló como el “affaire” del azúcar, el supremo negociado del siglo. Los empresarios de la CAT fueron perseguidos, apresados, procesados y, cuando todo eso no resultó suficiente, detenidos “a disposición del PEN”. La CAT fue intervenida, expropiada por ley y todos sus bienes y fábricas entregadas a una empresa estatal creada para tal fin,

CONASA, administrada por coroneles, hasta que la nueva dictadura del “Proceso” remató los ingenios a precio vil.

¿Qué significado debemos darle a esos acontecimientos, en particular a la persecución encarnizada contra la CAT? ¿Tienen alguno? Para comenzar, digamos que todo el país se ha tragado la fábula, creada por aquellos gobernantes, de que habrían actuado para “racionalizar” la actividad, terminar con la delincuencia económica y “moralizar” la industria. Semejante credulidad se entiende, porque el país estaba preparado para creerlo y, sobre todo, porque *quería* creerlo; y porque a los industriales azucareros rivales, tanto de Tucumán como especialmente a los de afuera, es decir, los grupos de Arrieta-Blaquier y Patrón Costas, les convenía creerlo y fueron, de hecho, cómplices de la intriga. Pero la demolición de la CAT fue sólo una parte de la amputación brutal practicada en la economía tucumana, y lo curioso, y en cierta medida trágico, es que ese mismo feroz ataque contra Tucumán nunca fue visto como tal, ni siquiera en la propia provincia, sino como una “crisis” natural e inevitable de su enferma economía.

No existe descripción histórica que no contenga esta narrativa, que denominé en otro trabajo como la *sacarofobia* de la cultura argentina, con lo que aludo a un componente, cristalizado como el azúcar, pero cristalizado en el cerebro de los argentinos, especialmente de los porteños. La *sacarofobia* es un ideologema, una falacia, un argumento que no es verdadero, aunque tiene la apariencia de tal; se funda en una petición de principio que integra la mentalidad promedio del país, y no tan promedio, porque la sacarofobia es cultivada y argumentada por historiadores, sociólogos y economistas de todas las escuelas y todas las ideologías, de la izquierda a la derecha extremas. En pocas palabras, la sacarofobia es la representación de todo lo que tiene que ver con el mundo azucarero de Tucumán (¿quién sabe qué es Ledesma, o Tabacal, cuando habla del atraso tucumano?) como el compendio del mal encarnado en la historia: mal en sentido *moral*, porque sus propietarios son malvados explotadores, ricos ausentistas, ladrones del fisco, incompetentes industriales, etc.; mal en sentido *físico*, porque los sacarófobos imaginan que los ingenios tucumanos son chatarra obsoleta; mal en sentido *histórico*, en fin, porque azúcar significa estructuras retrógradas e injusticia social. Como todo mal verdadero, absoluto, el mundo azucarero tiene la propiedad de ser una pesadilla recurrente para el sacarófobo, un mal de nunca acabar. ¿Cuándo terminará la pesadilla del azúcar?, se pregunta el sacarófobo, y sueña con el fin de la historia azucarera de Tucumán.

Un motivo predilecto y universalmente aceptado de la sacarofobia es la referencia a “los ladrones de la CAT”: este motivo es uno de los dogmas del credo y constituye un rasgo casi idiosincrático de todo argentino (y tucumano) de la generación que conserva memoria histórica de los años 1960’ y 1970’. ¿Tiene algo que ver todo esto con el mundo real? Carece de importancia, porque un ideologema no necesita de ninguna correspondencia con el mundo real. Se alimenta de otras fuentes, que no son sin duda las empíricas. La sacarofobia es un cristal mental pero, a diferencia del azúcar, no se disuelve con nada. Sin embargo, como no llevaré mi escepticismo al extremo, la anécdota contenida en este trabajo debe leerse como una invitación a reconsiderar un aspecto de la historia del país. Antes, sin embargo, desgranaré las tesis que subyacen a la crónica:

(1) La demolición de la economía azucarera de Tucumán ejecutada a partir de 1966 constituyó una batalla importante, por su carácter inicial y experimental, en la lucha por desbaratar el modelo social y económico de la Argentina de posguerra e implantar uno nuevo, el del capitalismo especulativo, de la Argentina desindustrializada y compradora,

altamente concentrada y absolutamente dependiente del capital y de la voluntad política de los Estados Unidos. Los grupos sociales beneficiados, que actúan apenas como mandantes de Washington, constituyen una especie de cleptocracia,¹ conformada por la coalición de los grandes grupos económicos con los militares, los sindicalistas, la clase política y las sectas integristas de derecha que han colonizado crecientemente el aparato del Estado desde los años '60 y no lo sueltan, porque se adaptan a las dictaduras, las democracias y las semidemocracias.

(2) La comprensión del “misterio” argentino, el misterio de un país que parece haber cometido suicidio, requiere abandonar lo que un autor denominó *la impostura economicista*.² La sacarofobia es una de las versiones más antiguas y acabadas de esta impostura. Señala O'Donnell que el capitalismo financiero que se impuso en nuestro país tiene sus gerentes, sus ideólogos y sus propagandistas bien remunerados. Pero hay algo más, y es la cuestión de *cómo* se impuso este capitalismo financiero. La anécdota de la CAT, creo, será un buen ejemplo de ello: se impuso por la fuerza, y no precisamente por las “impersonales” fuerzas económicas, el triunfo de “lo desarrollado y moderno versus el atraso”, etc. No estamos ante algún proceso inevitable y fatal ni ante la realización de la “justicia” del mercado. Todo lo contrario: las armas empleadas fueron el poder militar, la fuerza del Estado, la máquina administrativa, policial, judicial y periodística, y también la manipulación del mercado. La historia de empresas no se puede contar a partir de sus libros contables, más las “leyes” de Adam Smith y el manual de Samuelson: intervinieron los decretos, pseudo-leyes e infinitas resoluciones “administrativas” del poder central; los generales, coroneles, gendarmes y policías federales; y también aquellos jueces que aceptaron prestarle el manto de una falsa legalidad a una estructura institucional violentada y corrompida.

(3) Que el Estado argentino cumpliera ese papel de aniquilador de una economía regional es lo notable del caso, porque otorga a una anécdota apenas provinciana una significación algo mayor, ya que nos habla acerca de la naturaleza real de este Estado argentino, llamado Estado “nacional”, PEN. Nos obliga a reconsiderar seriamente su habitual e irreflexiva caracterización como “Estado nacional”: es un poder central, sin duda, pero eso es algo distinto, y su fuerza centrípeta adquirió precisamente dimensiones avasalladoras a partir de la dictadura de Onganía. Una fuerza centrípeta que ejerció una función desintegradora, porque no fue solamente la dictadura de una clase o de una coalición de grupos sociales sobre el resto de la sociedad argentina; fue particularmente la dictadura de una parte del país sobre el resto. Para imponerse desarrolló una guerra civil, semi-declarada y semi-encubierta, y su hegemonía requirió de la ocupación militar de las provincias, en coalición con los grupos dirigentes locales allí donde encontró quienes se prestaran a actuar como sus agentes, o anulando las hegemonías existentes y creando otras nuevas cuando se hizo necesario. Actuó como una verdadera máquina de guerra interior, en tiempos de aparente paz. Los horrores y los monstruosos excesos de la dictadura posterior contribuyeron a que la mirada

¹ Leo, una vez escrito lo anterior, que Halperín Donghi emplea el término para caracterizar la actual clase gobernante y dirigente. La cleptocracia es un fenómeno sociológico que arrasó con numerosos países asiáticos, latinoamericanos, africanos y centroeuropeos: parece formar parte de lo que muchos llaman “globalización”, pero también es casi seguro que tanto en sus orígenes como en su conformación y modalidades de robo y de dominio, cada país tenga sus peculiaridades. V. Cohen, Michael y Margarita Gutman (eds.), *¿Argentina en colapso? América debate*. Buenos Aires, The New School-IIED, 2002, pg. 28.

² O'Donnell, Guillermo. “La impostura economicista”, en Pablo E. Chacón (entrevistas), *El misterio argentino*, Buenos Aires, El Ateneo, 2003, pgs. 151-172.

retrospectiva tendiese un manto de piedad sobre la dictadura de Onganía, al punto que algunos la describen como una “dictablanda”. Eso constituye un serio error de perspectiva, porque fue precisamente esa dictadura la que, en lo político e institucional, consolidó definitivamente la estructura del PEN como poder hipercentralizado, burocrático y autoritario; y, en lo económico, con Salimei y Krieger Vasena inició la demolición del capitalismo nacional argentino y el enfeudamiento del país al capital extranjero y al FMI. Esta reconsideración del poder argentino, el PEN, es un prerequisite para la comprensión de la historia argentina reciente, a menos que nos satisfaga declararla un “misterio”. El PEN ganó una guerra civil larvada, nunca declarada y apenas percibida por sus víctimas como tal, y se erigió al final del proceso, tras cuarenta años de demolición y disolución de la sociedad, en el único e hipostático actor hegemónico, coaligando empresarios, burócratas, tecnócratas y propagandistas con una casta política, sindical, militar y eclesiástica. Su control territorial sobre todo el país se ejerce mediante una cadena hegemónica que desciende desde la cúspide del aparato burocrático hasta la base de la sociedad; el flujo en dirección contraria fue suprimido, *des-institucionalizado*. La “representación” fluye desde arriba hacia abajo y desde el centro hacia la periferia. El poder no representa, sino que crea sus propios representantes. Campeando soberano y desprendido por entero de la sociedad, a la que licuó hasta disolver todos los canales de comunicación entre Estado y sociedad civil, se erige como un poder casi de tipo asiático.

(4) Por último, una precisión acerca del término *capitalismo* empleado o citado más arriba. Entiendo que se trata de un concepto fundamentalmente ideológico y metafísico, cuyo contenido empírico es escaso o nulo, en la medida en que es empleado por todo el mundo para aludir a entidades históricas como los Estados Unidos, España, Japón, la Rusia postsoviética, los países latinoamericanos, etc., etc. La lista abarcaría todo el registro de las Naciones Unidas menos un puñado de países: China comunista, Corea del norte, Cuba y alguno más. Dice tanto que no dice nada.³ Martín Malia apunta que apenas podemos discernir tres componentes *reales* (empíricos), que son comunes a todas las entidades históricas que se suelen clasificar bajo la palabra capitalismo: la propiedad privada, el beneficio y el mercado. Pero no resulta claro que ninguno de los tres posean esa condición. Un mercado, por ejemplo, resulta indefinible si no se precisan las características de la estructura social sobre la que se asienta, así como las instituciones políticas, jurídicas y administrativas, además de las reglas específicamente económicas, que lo delimitan; y por fin los hábitos, las creencias y los valores (la cultura, en una palabra) de los agentes que actúan en él. A poco que reflexionemos, se advierte que “mercado” no es más que otra palabra para designar a la sociedad, siempre que exista un mínimo nivel de libertades: libertad de circular, de producir, de vender, de acumular dinero, etc. Mercados hubo en la Grecia y la Roma antiguas, en las ciudades medievales, en la América colonia de España. La expansión del mercado en las sociedades que llamamos capitalistas, desde el siglo XVI en adelante, fue un proceso coextensivo, sino es que fue una sola cosa, con la expansión de las libertades civiles. De manera que para hablar de cualquier mercado debemos definir a la sociedad entera que lo constituye. Lo mismo se aplica a los restantes componentes, la propiedad privada y los beneficios, razón por la cual no los analizaré aquí.

Ahora bien, en Argentina, hasta los años 1970-80, existía un tipo de sociedad capitalista, que muy sintéticamente puede caracterizarse como sigue: productora de bienes primarios, semi-industrializada, con una clase empresaria muy fuerte en Buenos

³ Ver al respecto: Malia, Martín. *The Soviet Tragedy. A History of Socialism in Russia, 1917-1991*. New York, The Free Press, 1996, pgs. 48-49.

Aires y el Litoral, mucho más débil en provincias; una vasta clase media de pequeños y medianos empresarios, comerciantes, empleados y funcionarios, maestros y estudiantes, y también pequeños y medianos intelectuales (con unos pocos grandes), y una clase trabajadora fuertemente sindicalizada (en Tucumán con mucho poder) y con un elevado grado de participación en la distribución del ingreso. Se fundaba en una cultura productiva y la sociedad se organizaba como un remedo, muy incompleto si lo cotejamos con los modelos centrales, de capitalismo del bienestar. La presencia del capital extranjero en las finanzas, la industria y el comercio era importante, pero no dominante. Denomino a eso el “capitalismo argentino realmente existente”, efectuando una traslación de la operación intelectual que se reveló como necesaria para la comprensión de las sociedades que se autotitularon como “socialistas” en la historia contemporánea. Dado que el “capitalismo” no existe sino como un modelo ideológico (para repudiar o elogiar), el término sólo adquiere valor descriptivo y analítico si alude a un lugar y un tiempo histórico determinado. Esto, con mayor justificación aún que en el caso de los “socialismos realmente existentes”, que al fin de cuentas constituyeron una familia casi única de sociedades, caracterizadas por la propiedad universalmente estatizada, la planificación, la dictadura del partido único y, trágicamente, por su carácter criminal (un rasgo que la conciencia humanista de los occidentales se niega tercamente a reconocer). Las sociedades que habitualmente llamamos capitalistas, por el contrario, no podrían ser resumidas de igual modo, porque presentan una inmensa variedad en sus estructuras sociales, políticas y económicas, en sus reglas jurídicas y constitucionales y en su cultura.

El proceso iniciado hacia la década de 1960, del cual el caso tucumano fue una especie de caso piloto, consistió en la destrucción del capitalismo realmente existente en Argentina, con su clase empresaria nacional fundada en la producción. Lo que le sustituyó, o sea la agonía que vivimos, necesita un nombre para nombrarlo. En la nueva sociedad argentina, la cúspide la ocupan un puñado de grandes corporaciones económicas, cleptocráticas en sí, más una cleptocracia específica originada en el aparato del Estado, los partidos y los sindicatos, mientras que una parte inmensa de la sociedad devino en una especie de clientela romana revivida. Cleptocracia es algo más empírico que “capitalismo financiero”, pero su significado requiere que asistamos todavía al completo despliegue del proceso. ¿Hacia dónde va? ¿O vamos hacia la nada? Pero entremos ahora en la crónica, la cual -si la interpretación que propondré no está del todo errada- debería proporcionar el fundamento de las tesis expuestas.

DESARROLLO:

LA CAT Y LA OFENSIVA MILITAR DE 1966-1967⁴

En 1962, el gupo Tornquist se desprendió de la Compañía Azucarera Tucumana, empresa que poseía por ese entonces cuatro ingenios en Tucumán. La CAT había sido fundada en 1895 por Ernesto Tornquist, uno de los hombres de negocios más brillante de la generación del ‘80, en sociedad con Diego y Pedro G. Méndez, empresarios tucumanos. Se componía en su origen de tres ingenios -La Florida, Nueva Baviera y La Trinidad- a los que se agregaron el Lastenia y San Andrés, en 1901. Hasta

⁴ La reconstrucción de la historia que se contará debe tomarse como provisional. En primer lugar, por el estado todavía inacabado de nuestra investigación, pero también por las dificultades que ofrece el silencio calculado y el carácter conspirativo de gran parte de los actores, uno de cuyos efectos es la destrucción deliberada de muchos de sus rastros. Me informa Emile Nadra, propietario y conductor de la CAT: *“Nosotros fuimos despojados, no sólo de la empresa y sus fábricas, sino de toda la documentación, de todos los archivos, inclusive de los cuadros que colgaban en nuestras oficinas y que, según me informaron, algún coronel de Onganía se los llevó a su casa, o quizá para enriquecer el patrimonio de la “Cit  Catholique” a la que Ud. se refiere”*. Correo electrónico, Buenos Aires, abril de 2003.

la década de 1950 la CAT fue la principal productora de azúcar del país, con cuatro ingenios (San Andrés fue cerrado en los años 1930), dos destilerías y 57.000 hectáreas de tierras en la provincia. Ocupaba 10.000 personas en las fábricas y los surcos. Por esos años la CAT comenzó a desprenderse de todas sus tierras y, como un efecto de la crisis interna que atravesaba la firma de los herederos de Ernesto Tornquist, el grupo decidió retirarse de la actividad azucarera, cosa que se concretaría en 1962.⁵

Cuando el nuevo grupo económico se hizo cargo de la CAT, ésta quedó conformada por los cuatro ingenios del viejo grupo, a los que agregó el ingenio Santa Rosa, adquirido a Erwin Pallavicini S.A.-Staudt a fines de ese año. Emile Nadra, tucumano, era el accionista mayoritario, asociado en la operación con José Ber Gelbard. La relación entre ambos provenía de los tiempos en que Gelbard militaba intensamente para organizar a los empresarios, industriales y comerciantes del interior del país en lo que terminaría siendo la Confederación General Económica (CGE), una alternativa “federal” para hacer frente al poderoso lobby de los terratenientes e industriales del litoral, agremiados en la Unión Industrial Argentina y en la Sociedad Rural. Nadra era hijo de inmigrantes libaneses, como Gelbard de judíos polacos, y sus dos familias se habían afincado y prosperado en el Tucumán azucarero de la primera mitad del siglo. Nallib Nadra, padre de Emile, ingresó a la actividad azucarera en 1935, como mayorista de azúcares, y en la década de 1940 se había convertido en un importante consignatario de azúcares de varios ingenios tucumanos. Emile, tras una juvenil y destacada participación en el movimiento universitario tucumano, clausurada abruptamente luego de 1945, completó sus estudios de ingeniero en Córdoba para escapar a la persecución política y, a su retorno a la provincia, se incorporó a los negocios de su padre en 1950. La empresa familiar creció, operando siempre en el ramo mayorista, fuertemente vinculada a los ingenios oficiales o de propiedad mixta de la provincia, hasta que en 1960 se radicó en Buenos Aires para dirigir la firma Paladar S.A., distribuidora de azúcares y otros comestibles, en la cual ya aparece asociado con Gelbard.

María Seoane sostiene, en su biografía de éste último, que la operación de compra de la CAT constituyó en realidad una operación de lo que se conocía como el “Directorio” del Partido Comunista argentino: una modalidad de acción que habría sido ideada por Vittorio Codovilla en los años 1940’, consistente en un grupo encargado de dirigir las finanzas del PC, con la idea de sacar los negocios de las manos inexpertas -y peligrosas- de los militantes activos, dejando su conducción en quienes verdaderamente saben del asunto: los empresarios y hombres de negocios, fuesen éstos afiliados, simpatizantes, simples amigos o socios de sus miembros. El “Directorio” estaba integrado, desde sus orígenes, por Orestes Ghioldi, Gerónimo Arnedo Alvarez, Felipe Bedzrodnik y Fernando Nadra, hermano de Emile y futuro sucesor de Codovilla en la secretaría general del PC, entre otros. Gelbard se habría sumado al equipo en 1948, y pronto sería su figura más brillante y dinámica, haciendo negocios dentro y fuera del mismo.⁶

La afirmación de que detrás del grupo Gelbard-Nadra se encontraban los dineros del PC y, según se decía, de la propia Unión Soviética, constituiría un rumor, una sospecha, un tema que cada tanto aparecía en la prensa diaria y sobre todo en los libelos políticos; pero también fue una obsesión de los servicios de seguridad y de espionaje del Ejército y del Estado a lo largo de la década de 1960. Los integrantes del grupo CAT negaron siempre tal filiación, y Emile, al fin el propietario y figura principal de la

⁵ *La Nación*, 1910 (Edición extraordinaria); *Revista Azucarera*, 1924, pg. 46: Compañía Azucarera Tucumana. *50 años de la CAT*, Buenos Aires, 1945; *La Gaceta*, 22 de mayo de 1970 y 15 de mayo de 1983.

⁶ Seoane, María. *El burgués maldito*, Buenos Aires, Planeta, 1998, pgs. 58-59.

empresa, afirmó en diversas oportunidades que no fue más que un empresario que, luego de su desempeño como dirigente estudiantil, se consagró a los negocios y nunca se afilió o militó en ningún partido político, a diferencia de su hermano Fernando, de notoria trayectoria en el comunismo. No dispongo de la evidencia necesaria para establecer qué había de cierto y qué no en todo esto, y sobre todo, para fundar una opinión acerca de dónde terminaban los negocios y las inversiones personales de cada uno en ese negocio, si es que el PC participó en la empresa. Lo cierto es que Seoane también carece de esas pruebas, y cabe decir que su relato es confuso y erróneo en algunos aspectos.⁷

El hecho es que hacia 1962, cuando compraron la CAT, Gelbard era todavía una especie de muerto civil, inhabilitado desde 1955 como ciudadano, imposibilitado de actuar gremialmente en la CGE y, también, de actuar personalmente en cualquier negocio. Gelbard integró en el nuevo Directorio de la CAT a Jacobo Goransky, probablemente colega y compañero suyo en las filas “empresarias” del PC, en representación de sus acciones, además de las inversiones que pertenecían al propio Goransky. Vástago de una familia de bodegueros y viñateros de San Juan, Goransky sería el Director de Producción de la firma. Además de ellos dos, el nuevo directorio de la CAT se compuso con Aldo M. Rodríguez, antiguo funcionario de la DGI, asesor impositivo de numerosas firmas quien, me atrevo a afirmar por ciertos indicios, integraba las filas del PC; con Orlando D’Adamo, empresario forestal amigo de Gelbard, socialista en su juventud; con Oscar Llobet y Carlos Garber, abogado, ligados ambos a Gelbard en otros negocios; y Fernando Tornquist y Bogdan Konstantinoff, que provenían del anterior grupo propietario. Presidía la firma José Figueroa Alcorta, proveniente de Sautt, y Emile Nadra, su vicepresidente durante el año 1962, abandonó luego la gestión activa de la CAT en 1963 y 1964 (quizá por desinteligencias con Goransky), para retomar el cargo y la función de verdadero factótum de la CAT en 1965, hasta su liquidación final. En cuanto a Gelbard, vendió sus acciones y se retiró de la CAT en 1965, probablemente intuyendo (o sabiendo, porque su éxito empresario residía en gran medida en estar bien informado) que el negocio azucarero tucumano, y especialmente el de la CAT, se encontraba ya condenado.⁸

Cuando Salimei anunció el cierre compulsivo de los ingenios tucumanos, cuatro de los siete que cayeron bajo su “espada de la revolución” pertenecían a la CAT: todos menos el Santa Rosa. José Figueroa Alcorta, quien presidía por ese entonces la firma, denunciaría de inmediato: “Si es por las deudas que acumulamos, hay ingenios que deben cinco veces más que nosotros y no los van a cerrar; eso, al margen de que el pago

⁷ Dice Seoane: “Si bien los comunistas siempre guardaron en secreto su participación en este emprendimiento -que terminaría en un juicio cuya duración fue de casi tres décadas, y que definió la salida de Gelbard del ‘Directorio’ y su alejamiento de todos los proyectos comerciales con el PC- se supo que ingresaron como accionistas mayoritarios pagando el 2 por ciento del valor de los ingenios, una masa de dinero conseguida mediante un crédito del Banco Buenos Aires y del Banco Ciudad de Buenos Aires (que serían también del PC: aclaración mía), con contactos facilitados por el liberal Cueto Rúa, miembro del negocio, que les permitió tomar la posesión. La garantía fueron bolsas de azúcar inexistentes”. María Seoane, cit. 95-96. Cabe preguntar: ¿cómo “se supo”?; y ¿qué sentido tiene eso de que pagaron el “2 por ciento”, que no impresiona como ninguna “masa de dinero”? Por lo demás, introduce a Cueto Rúa en 1962, cuando su intervención fue recién en 1967, y alude a los infaltables “azúcares inexistentes” de garantía que, como se verá más adelante, fue la acusación central contra la CAT, pero en...1970. En fin, todo lo que que deseo es poner de relieve que sobre este tema de las relaciones de la CAT con el comunismo, que no puedo dejar de mencionar por la centralidad que adquirió, aunque más no sea en la fantasía del país, abundan precisamente las afirmaciones fantásticas, aún en un estudio tan interesante como el citado.

⁸ Emile Nadra, Declaraciones ante el juez Dr. Julio M. Sosa, Tucumán, 17 de noviembre de 1971; *Panorama* 161, 26 de mayo de 1970, pg. 12; Seoane, cit., pgs. 128-129 y 143-144.

de tales deudas estaba ya previsto. Si es por nuestros rendimientos, Florida tiene 9.31 (como algunos ingenios de Salta y Jujuy); Trinidad, 8.34, y Lastenia acusa un buen nivel, 8.84, superior al promedio de la provincia, que es de 8.82. En cambio, San José, Los Ralos y San Ramón están por debajo del 8 por ciento”.⁹ En una solicitada publicada apenas conocidas las medidas de Salimei, el Directorio de la CAT informaba que ya antes del golpe militar el Banco Nación había paralizado prácticamente sus líneas de créditos con la firma, mediante maniobras administrativas, tratamiento que no se daba a los restantes ingenios.¹⁰ La prensa porteña daba como un hecho, desde tiempo atrás, que la CAT se encontraba al borde de la quiebra. Ante el drástico golpe, la compañía inició una querrela judicial contra el PEN, por un monto de 2.200 millones de pesos, calificando a la acción oficial de ensañamiento en contra de una firma privada.¹¹ La expectable posibilidad de perder el juicio (no decidido aún el PEN a “presionar” a los jueces) condujo al posterior retroceso del régimen, autorizando la reapertura de dos de las fábricas de la CAT a cambio del cierre y desmantelamiento inmediato de las otras dos (Lastenia y Nueva Baviera). Pero entretanto, los gendarmes colocados como interventores de sus ingenios en agosto de 1966 no se ahorran ningún atropello. En enero de 1967, Figueroa Alcorta denunciaba que no habían realizado siquiera el inventario de los bienes de los que se habían apoderado, actuando deliberadamente para provocar la “ruina moral y material” de la empresa. Los gendarmes-interventores, en efecto, tomaron las empresas como su coto de caza y descalificaban impunemente, en la prensa local, a los propietarios de la CAT. Nombraron toda una colección de “colaboradores”, con generosos sueldos a cuenta de la empresa, y algunos de ellos retornaron a Buenos Aires, desde donde pretendían conducir las fábricas.¹² La sucesión de irregularidades cometidas por esta administración que venía a “moralizar” la industria fue tan aplastante, incluyendo manejos turbios de las planillas de sueldos de las fábricas, que el propio “Coordinador General de Interventores” de ingenios tucumanos (curiosa función), un comandante de gendarmería, se vio obligado a reconocer la situación, afirmando a la prensa que, “con respecto a una novedad surgida en los fondos propios del ingenio (La Florida), la Intervención radicó oportunamente la denuncia correspondiente ante la Justicia”. La verdadera “novedad”, estaban aprendiéndolo los tucumanos en carne propia, era que la CAT, y en gran medida la provincia tras ella, se habían convertido en una tierra de nadie.¹³

¿Porqué la CAT?

Surge naturalmente la pregunta: ¿porqué, especialmente la CAT, sería el blanco predilecto de Onganía y Salimei, decididos a liquidarla en 1966, un objetivo logrado al fin en 1970 por Jorge Peyceré y su equipo? Desde 1962, casi al día siguiente de que el grupo Nadra-Gelbard tomase el control de la firma, un motivo insistentemente alegado, bajo distintas formas, para atacar a la CAT fue el argumento de los delitos económicos del grupo. Uno de ellos consistía en que la CAT fabricaba azúcar “negro”, o sea azúcares no declarados, violando los cupos asignados y evadiendo impuestos. No estoy en condiciones de negarlo ni afirmarlo, porque ¿qué industrial no produjo azúcar “negro” a lo largo de su historia empresarial? Es notorio que el ingenio Ledesma fue el más grande productor de azúcar “negro” en la historia azucarera argentina, ignorando olímpicamente las disposiciones o reglamentaciones, y aún los acuerdos empresarios

⁹ *Panorama* 192, 30 de agosto de 1966, pg. 14.

¹⁰ *La Gaceta*, 4 de setiembre de 1966.

¹¹ *Primera Plana* 206, 6 de diciembre de 1966, pg. 25.

¹² Denuncia de José Figueroa Alcorta, presidente de la CAT, en *La Gaceta*, 6 de enero de 1967.

¹³ *La Gaceta*, 12 de febrero de 1967.

voluntarios, que imponían limitaciones a la producción en los períodos de superproducción azucarera, conducta que contribuyó en gran medida a la crisis de 1965-1966. El propósito de Herminio Arrieta y sus socios consistía en anegar el mercado del azúcar para derrumbar el precio y de esa manera, contando con el respaldo financiero que no llegaba a los ingenios medianos y pequeños de Tucumán, provocar su quiebra. Esto a pesar de que, junto con los restantes ingenios de Salta y Jujuy, el Ledesma resultaba ser el principal beneficiado mediante las cupificaciones establecidas por la política azucarera nacional, tanto bajo el gobierno de Illia como, mucho más decididamente, a partir de las regulaciones impuestas “manu militari” por Salimei y su sucesor Krieger Vasena. Pero lo más irónico del asunto es que Arrieta producía azúcar “ilegal” e inmediatamente formulaba demandas de inconstitucionalidad contra las disposiciones o acuerdos empresarios de limitación de la producción. En esa lucha, el azúcar llamado “negro” fue su mejor arma de combate. ¿Lo persiguió la justicia por eso? Todo lo contrario, porque, en vez de tipificar su conducta como delincuencia económica, la Corte le prestó legitimidad en nombre de la “libre empresa”, y el PEN, por su parte, consagró mediante decretos y reglamentaciones el ascenso monopólico del grupo. En suma, el azúcar negro del Ledesma se veía “blanqueado” por una justicia y un poder arbitrarios.

Otro motivo para atacar a la CAT, un motivo que desvelaba a Onganía y sus agentes, que se susurraba en forma semipública en la prensa y en los informes de los servicios, aludía a la “ideología de extrema izquierda” de los directivos de la CAT. ¡Los ingenios de la CAT eran “los ingenios de los comunistas”! En 1966 circuló profusamente un informe de la SIDE que aseveraba que la compra de 1962 había sido efectuada con un millón de dólares financiados por la URSS: en tiempos de la guerra fría, la intriga del comunismo internacional obsesionaba a los militares y fue una de las razones fundamentales del golpe militar. De manera que la CAT fue un objetivo político, no sólo económico, cuya destrucción parece haberse convertido en una prioridad para la mente febril de los militares golpistas. El mismo día en que Salimei propaló su tronante discurso anunciando el asalto sobre Tucumán, el 21 de agosto de 1966, el diario *La Nación*, bien enterado de los entresijos del poder, anticipaba que “en cuanto a los ingenios afectados, serían Florida, Lastenia, Nueva Baviera y Trinidad, de la CAT, un grupo financiero en el que se creyó reconocer tiempo atrás una influencia ‘frigerista’ y al que actualmente se sindicaba como izquierdizante...”. La CAT anunció entonces, por medio de una solicitada en la prensa de Buenos Aires y de Tucumán, que iniciaría una querrela criminal contra el diario de los Mitre, convocando como testigo a Nicanor Costa Méndez, ministro de Relaciones Exteriores de Onganía, en su calidad de asesor letrado interviniente en la operación de compra-venta de 1962 entre el grupo Tornquist y los nuevos dueños. Tal carta de “presentabilidad”, sin embargo, que comprometía legalmente a un notorio integrista y anticomunista, un miembro prominente del poder y de la “alta sociedad” porteña -y una curiosa reliquia decimonónica en la Argentina de 1960, dicho sea de paso, con su levita, su galera y su bastón- no sería suficiente, como no lo era que un Figueroa Alcorta fuera su presidente, para levantar la condena ya secretamente dictada.¹⁴

Para colmo de males, el grupo CAT no se componía tan sólo de comunistas, sino también de judíos: Goransky, Duvchansky, Gelbard, etc. Conviene recordar a este respecto un episodio sumamente significativo. A fines del conflictivo año 1965, sembrado de huelgas azucareras y de duros enfrentamientos entre sindicatos y patrones, sumergida la industria en una severa crisis por producir mucho -no por improductiva, precisamente-, en un contexto en el cual el PEN (todavía un PEN constitucional, o al

¹⁴ *La Nación* y *La Gaceta*, 21- 23 de agosto de 1966.

menos semi-constitucional, como el de Illia) se negaba tenazmente a trazar ninguna política azucarera nacional, estableciendo reglas de juego equitativas para todas las zonas productoras, la ofensiva de los sindicatos contra la dirección de la CAT presentó unas connotaciones particularmente violentas y muy llamativas. A principios de diciembre de ese año, en el curso de un paro general, los sindicatos de los obreros de la CAT, pertenecientes a FOTIA (la Federación de los sindicatos de obreros azucareros), proclamaron que “no se responsabilizaban por la vida de los administradores de los ingenios” de la compañía, en una apenas velada amenaza de muerte. El viernes 17 de diciembre, finalmente, una partida de obreros y sindicalistas tomó por asalto y destrozó la sede de la CAT, en pleno centro de la ciudad capital: al mediodía de aquella jornada, arribó una columna de obreros del ingenio La Trinidad, montados en tres camiones precedidos por un jeep, que ingresó a la Plaza Independencia por Congreso, para estacionarse en 25 de Mayo primera cuadra, frente a la sede de la CAT, a escasos metros de la Casa de Gobierno. El jeep que encabezaba la manifestación propalaba marchas militares, y los manifestantes portaban grandes carteles en los que podía leerse:

INGENIO LA TRINIDAD
HAMBRE
MUERAN LOS JUDÍOS

La leyenda contra los judíos se completaba al pie con un dibujo, de trazos casi infantiles, que representaba un patíbulo con un ahorcado. La muchedumbre trepó la explanada de la Casa de Gobierno profiriendo insultos contra el gobernador Lázaro Barbieri y luego se dirigió a la vieja casona de la esquina, antigua propiedad de los Méndez convertida en los escritorios centrales de la CAT. Violentaron las puertas e ingresaron tirando bombas de estruendo; munidos con las astas de banderas, destrozaron todos los cristales de puertas y ventanas y arrojaron por las ventanas escritorios, máquinas de escribir y todo género de papeles y documentos, saqueando a voluntad las oficinas para realizar una gran fogata en la calzada, frente a la plaza. El asalto, cometido a 20 metros de la sede del gobierno, no fue molestado por fuerza policial alguna, y concluyó cuando los dirigentes ordenaron subir a los vehículos y la columna, al son de los ritmos marciales del Jeep, se dirigió a la Legislatura, donde los dirigentes entrevistaron al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia: luego del vandalismo, la negociación entre políticos y sindicalistas proseguiría como si nada.

Los directivos de la CAT, en suma, eran sospechados como agentes del comunismo internacional y repudiados por su condición de judíos, y los sindicatos se habían sumado con entusiasmo a la caza de brujas lanzada por aquel gobierno de militares y civiles henchidos de ideología católico-corporativa. Cabría agregar que el ministro Jorge Salimei, que inició al ataque brutal contra la CAT, introdujo sus propios intereses en el asunto. Salimei concibió que el cerco, maravillosamente tendido “por la providencia” contra la CAT, constituía una excelente oportunidad para un nuevo avance del grupo económico que él mismo comandaba, SASETRU, una vasta empresa económica del Opus Dei (secta a la cual pertenecían el ministro y numerosos miembros del elenco de Onganía, entre otros el señor Virginio Pinali, amigo y pariente de Salimei, a quien éste nombró Director Nacional de Azúcar). Salimei quiso aprovechar la oportunidad para extender sus ramificaciones a la industria azucarera, para lo que planeó la incorporación a SASETRU de alguno de los ingenios cuyo cierre había impuesto de manera compulsiva. Es decir que, al mismo tiempo que quebrantaba a los grupos empresarios de la industria azucarera tucumana con el argumento de que esos

ingenios eran chatarra y que hasta la misma actividad resultaba impropia para la provincia, planeó adquirir uno de los ingenios cuya clausura había impuesto por la fuerza. Pero Salimei fue destronado a fines de 1966 por la guerra interna desatada en las entrañas del régimen y sus propósitos se vieron frustrados. En cuanto a los grupos azucareros rivales dentro de la provincia, cuya cámara empresaria guardaría todavía un prudente -y a la vez cómplice- silencio frente a la agresión, se restregaban las manos con fruición.¹⁵

El caso es que la mala fama de la CAT, continuamente trabajada por la prensa, se había convertido ya en algo proverbial, de manera que cualquier proximidad con ella era como el abrazo del oso. A pocos días de aquel feroz asalto de diciembre, perpetrado ante la más completa pasividad policial, el gobernador Lázaro Barbieri, reunido con todos los factores azucareros, dirá:

“-No defiendo, lógicamente, a la Compañía Azucarera Tucumana. Me disgusta que haya industriales así”.¹⁶

La CAT simbolizaba en su composición empresaria el conjunto reunido de todas las fobias y de todos los intereses que la dictadura militar ansiaba destruir: se trataba del grupo azucarero tucumano más fuerte, sus capitales pertenecían a empresarios locales y nacionales, muchos de ellos eran judíos y de sospechadas simpatías con el comunismo. Era probable, por si faltase algo, que detrás de la CAT se ocultara, en realidad, el “oro de Moscú”: ¡Una especie de versión comarcana de la fantasmática “Sinarquía”, encarnada en la no menos odiada clase azucarera tucumana! Para aquellos militares de inclinaciones fascistas, como para los sindicalistas, los católicos de sectas integristas y los tecnócratas liberales, semejante trinidad de judíos, comunistas y dueños de ingenios de Tucumán era mucho más de lo que se podía tolerar. El comunismo y el judaísmo de los empresarios azucareros de la CAT, sin embargo, permanecerá siempre como un “motivo impúdico”, algo que se decía en privado y sólo brotaba a la luz en momentos de exaltación nacionalista. La dictadura había dictado su “ley anticomunista”, pero no le resultaba fácil aplicar ese instrumento seudolegal de un gobierno de facto, porque la simple y alegada simpatía de convicciones no era suficiente, todavía, para colocar a los miembros de la CAT tras las rejas. En cuanto al “judaísmo” de la CAT, no podía ser entonces, como no lo es hasta hoy, una razón que ni el poder ni los enemigos de la CAT se atreviesen a asumir abiertamente como motivo de persecución, en un país como Argentina cuyo profundo antisemitismo nunca quiso reconocerse como tal. En este país el antisemitismo genera crímenes cometidos desde el poder que el poder nunca reconoce; la derecha produce y reproduce grupos de agresión criminal contra los judíos, pero ocultos en la clandestinidad, y se permite expansiones contra el judaísmo en su literatura panfletaria, pero sus agentes en el poder conservan una elegante y cínica “imparcialidad”. En cuanto a la izquierda, su actitud frente a los judíos es una copia, como en casi todo, de la moda de París, vistiendo su antisemitismo profundo con el ropaje del “antisionismo”. De manera que la estrategia que quedaba al alcance de aquella dictadura para destruir a la CAT, una que contase con el apoyo de la opinión pública y hasta con la consagración de los “cientistas sociales”, fue la de presentar a sus miembros como delincuentes económicos, “malos industriales” y, en general, una

¹⁵ V. Corbière, Emilio J. *Opus Dei. El totalitarismo católico*. Buenos Aires, Sudamericana, cap. VI; sobre el Opus y el régimen de Onganía; en cuanto a las oscuras maniobras de Salimei en Tucumán, *Ultima Línea* (Tucumán), enero de 1967; *La Industria Azucarera*, órgano del Centro Azucarero Argentino, conducido en esos años por Blaquier, Arrieta, Patrón Costas y un puñado de socios tucumanos (los Paz de Concepción, Minetti y la banca Roberts, quienes controlaban 4 ó 5 de los 27 ingenios existentes en 1966), apoyó el asalto lanzado sobre la provincia ese año y en los que le sucedieron.

¹⁶ Todos estos episodios en *La gaceta*, diciembre de 1965 y enero de 1966.

expresión del retraso que había que liquidar para abrir paso a la “modernización” del país.

Resulta obvio, por lo demás, que no fueron las ideas, ni la fe religiosa, ni la condición étnica, ni la “moral” de los directivos la CAT los que motivaron su condena a muerte. No constituían la razón, sino el *pretexto*, pero su utilidad residió en que convocaron a un inmenso espectro social, político y territorial para otorgarle legitimidad a la decisión inicua de liquidar un grupo empresario: el PEN encontraba, en la CAT, un flanco débil para golpear, detrás de ella, a la provincia entera; Herminio Arrieta realizaba sus fines económicos particulares, arrancando una enorme porción del negocio azucarero a su favor, en la medida en que la industria tucumana era asaltada y sumergida en el caos; sus socios menores en Tucumán fueron arrastrados detrás del “ingeniero”, porque daban un zarpazo inmediato con la aspiración de ocupar el lugar dejado por los ingenios caídos, incapaces como fueron de advertir que, en el mediano plazo, sus empresas no prosperarían jamás en una provincia para cuya ruina estaban colaborando; en cuanto a los políticos de todos los colores, enfeudados a sus conducciones “nacionales” en Buenos Aires, raramente entendieron el verdadero significado anti-capitalista, por antinacional, de las políticas trazadas por el PEN, sea bajo administraciones radicales o peronistas, como por las dictaduras militares. Y la bandera “antiindustrial azucarera” fue siempre el modo de apelar al “pueblo” cuando se está en campaña.

El golpe asestado por Salimei pretendió ser mortal pero no pudo serlo; en primer lugar, porque el PEN, en tiempos de Onganía, aún pretendía actuar dentro de un cierto marco de semi-legalidad, y la querrela judicial de la CAT amenazaba con volver las medidas brutales que había tomado en contra del propio poder central; pero sobre todo porque el plan de Salimei había sembrado el caos en Tucumán, por lo que pendía siempre la amenaza de un estallido social. En 1967 el equipo de su sucesor Krieger Vasena negoció la reapertura de los ingenios La Florida y La Trinidad, a cambio del cierre y desmantelamiento definitivo de Nueva Baviera y Lastenia. Al mismo tiempo, Emile Nadra tuvo que aceptar la incorporación de Julio Cueto Rúa como Presidente de la CAT: extraña imposición de un directivo que no poseía ni una sola acción en la firma, y que jamás se había desempeñado como empresario en el mundo azucarero.¹⁷ Se explica porque Cueto Rúa era un adalid del neoliberalismo, muy próximo a Krieger y uno de sus más férreos propagandistas. El extraño pacto impuesto por el PEN fue como poner al zorro a cuidar las gallinas, pero sin duda Nadra y el directorio de CAT no tuvieron otra salida que aceptar. La compañía retornó a la producción con sólo tres ingenios (Santa Rosa, La Florida y La Trinidad), tras los convenios trabajosamente negociados con el PEN en 1967, en los que, como las demás firmas azucareras, se pactaron planes de pago de las deudas empresarias con el fisco, las instituciones bancarias y los proveedores.¹⁸

DESENLACE:

LA FABRICACIÓN DE UN ‘AFFAIRE’, O EL PEN COMO PODER CONSPIRATIVO, 1969-1970¹⁹

¹⁷ Luis Gotheil dirá años más tarde que fueron los gobernantes del PEN quienes indicaron “que sólo se aprobaría el acuerdo si J.C.Cueto Rúa ocupaba la presidencia del Directorio de la compañía, como garantía moral del cumplimiento del acuerdo”. *Análisis* 510, 22 de diciembre de 1970, pg. 17.

¹⁸ E. Nadra, 17 de nov. de 1971; abril de 2003; *Panorama* 161, 26 de mayo de 1970.

¹⁹ Todas las declaraciones y acontecimientos en torno al “affaire” en: diarios *La Gaceta* y *Noticias* (Tucumán), *La Nación* y *Clarín* (Buenos Aires), abril-mayo-junio de 1970; revistas *Análisis*, *Periscopio* y *Panorama*, mismos meses; revista *La Industria Azucarera*, volumen 1970.

El asedio contra la CAT, una vez recuperados dos de los cuatro ingenios que Salimei les clausurara en 1966, asumió la forma de maquinaciones y conspiraciones administrativas, vigilancia policial y de los servicios, propaganda insidiosa, retaceo crediticio, pero pasaría de nuevo a la conspiración política directa del PEN a partir de la segunda mitad del año 1969. Un día del mes de setiembre desembarcó en Tucumán una extraña expedición proveniente de la Capital Federal: se trataba de un pelotón conformado por medio centenar de inspectores fiscales de la DGI y agentes de Coordinación Federal, portando una orden de un juez metropolitano que ordenaba allanamientos en los ingenios de la CAT (y algunos otros, para guardar las apariencias), con motivo de una causa originada dos años atrás, una defraudación contra CIFEN, el organismo estatal encargado de la comercialización exterior del azúcar argentino, en la cual se investigaba la desaparición de 5.600 tns de azúcar. La firma distribuidora “Laguzzi” habría cometido la estafa. Los inspectores y agentes federales, fuertemente armados, se presentaron en las oficinas de los ingenios La Florida, Santa Rosa y Trinidad, secuestraron todo tipo de documentación y, en el último de los nombrados, lacraron la caja de caudales que contenía los haberes de los obreros y empleados del ingenio.

La indignación estalló entre los trabajadores y el pueblo de los ingenios. En La Florida fue el propio capitán Solá -miembro del directorio de la CAT, arribado allí de la mano de Cueto Rúa- quien, acompañado por los dirigentes sindicales, los obreros y los empleados de la fábrica, expulsó a los inspectores y policías del pueblo, tronando indignado ante la prensa por esa extraña investigación de un delito cometido en Buenos Aires años atrás, cuando el ingenio se hallaba en manos de los interventores del PEN. Solá no dudó de que se trataba de “provocar el cierre definitivo de la fábrica”. En La Trinidad fue el sindicato quien se encargó de expulsar a la tropa de porteños. El día 15, el oficial jefe de Coordinación Federal realizaba un segundo intento de allanamiento en La Florida que fue nuevamente impedido por los obreros, esta vez bajo una pedrea general contra los intrusos. En Santa Rosa los incidentes fueron más serios, pues la gente expulsó a los “inspectores” a puñetazos y puntapiés, algunos de los cuales alcanzaron, de paso, al propio abogado de la empresa y síndico del ingenio, herido en el rostro cuando quiso proteger a los agentes del ataque de la muchedumbre.

Este último denunció la provocación ante el juez federal de Tucumán y justificó la conducta de los obreros porque, afirmaba, “captaron el carácter de esta investigación, que por su falta de oportunidad y su intención conforma un cuadro similar al ocurrido en 1966, constituyendo una nueva agresión contra el fortalecimiento y la existencia de la industria tucumana”. Puso de relieve el hecho “oscuro” de que un robo ocurrido en Buenos Aires, en el que estaba implicado el ex-Director Nacional de Azúcar Virginio Pinali, pariente de Salimei, y por el cual había sido finalmente exonerado, encontrándose prófugo en el exterior, condujera a este operativo en los ingenios tucumanos. A todo esto, los federales ingresaban fuertemente armados en todas las oficinas y fincas cañeras de la CAT, en franca actitud intimidatoria, saqueando papeles y perturbando el normal funcionamiento de la empresa, a punto tal que hasta el juez federal de Tucumán se vió obligado a intervenir (exigido por el abogado de la CAT), librando un oficio que conminaba a esa extraña tropa a limitarse a su cometido. Pero ¿cuál era ese cometido? Un suelto periodístico en la Capital Federal anunciaba, el domingo anterior, que en Tucumán “no pueden quedar más de seis ingenios”, y mientras se sucedían los incidentes que acabamos de narrar, el ministro-Gral. Imaz tranquilizaba desde Buenos Aires “a los obreros” de la CAT “porque las fuentes de trabajo estaban garantizadas”, exhortándolos a que “no se dejen engañar” por los directivos de la CAT, ya que era “posible” de que se estuviese ante “grandes

irregularidades". El mensaje del jefe político de la "revolución", emitido en setiembre de 1969, constituye toda una confesión de lo que estaba por venir; decía dos cosas y tenía dos destinatarios: a los "directivos" de la CAT les anunció, con más de seis meses de anticipación, el "affaire" que se "descubriría" como *cometido* en mayo de 1970. Y a "los obreros", que esta vez la táctica del PEN había cambiado: no se cerrarían las fábricas del PEN, sino que serían confiscadas en nombre de una gestión "nacional y popular". Imaz cerró sus declaraciones con pretendidas muestras de imparcialidad "interprovincial", asegurando que las "inspecciones" también tenían lugar en Salta y Jujuy. Es de imaginar la ancha y sibilina sonrisa de Herminio Arrieta al leer esto.

Pero retornemos a los incidentes en los ingenios de la CAT. El 24 de septiembre los tucumanos leían en la prensa local una solicitada firmada por "El pueblo de ingenio La Florida", en cuyo acápite, "para evitar suspicacias", se advertía que había sido costeadada con los frutos del "gran baile de la primavera"; los miembros de la comunidad declaraban, con cierto ingenuo aire triunfal, que "en el año 1966 fuimos golpeados por el Gobierno Nacional, pues en aquel entonces no estábamos organizados. Sepa el Gobierno Nacional que no nos golpeará más. Somos humildes, no sabemos nada de Dirección General Impositiva, ni de Coordinación Federal, sólo sabemos lo que creemos y lo que vemos". Los episodios vividos en el pueblo presentaban, por cierto, algunos ribetes curiosos: la solicitada tenía cierto aire de proclama, como que se autodenominaban "el pueblo de La Florida, organizado en un Gobierno Comunitario", y aludían incluso a un "Acta Constituyente" de tal gobierno, agregando: "El Gobernador de este Gobierno Comunitario es el señor Jaime Solá, él es el artífice de nuestro engrandecimiento, a él lo seguimos porque luego de un largo peregrinar encontramos a alguien en quien creer". El capitán ® Jaime Solá, antiguo revolucionario de 1955, militar "colorado" pasado a retiro en 1963, se desempeñaba como director-administrador de los tres ingenios de la CAT y miembro de su Directorio desde 1967. Era un enérgico y eficaz conductor de las fábricas, que había encontrado en La Florida el territorio para la expansión de su vocación política. Pero los tiempos eran malos para tales expansiones: en la solicitada, los habitantes de La Florida confesaban que el "Gobernador del Gobierno Comunitario" ya se había retirado de la provincia, "cansado por la práctica y el accionar de los organismos de represión". Es de sospechar que, tras los incidentes de esos días, el PEN y Onganía habrán hecho saber a Nancles, y al Directorio de la CAT, que si no retiraban al capitán de su ínsula barataria de inmediato, la guerra sería total. Para expertos en comunitarismo, el régimen militar se bastaba con el ministro Guillermo Borda, Mario Díaz Colodrero y los numerosos "agentes de la comunidad" colocados en el presupuesto provincial, bien rentados. Había demasiados campeones del comunitarismo católico, de pura cepa franquista, como para que la Compañía Azucarera Tucumana, además de sus judíos y sus comunistas, pretendiese también competir en el terreno político con su propio Napoleón en pequeño.

Aunque la ofensiva policíaco-impositiva lanzada desde Buenos Aires en setiembre de 1969 se vió frustrada por las revueltas populares que había desatado, los funcionarios del PEN volverían pronto a la carga. A comienzos de 1970 Raúl Arechaga, jefe de la DNA, excluyó a los ingenios de la CAT del derecho a entregar azúcar en el mercado interno, por resolución 43/70, argumentando que la firma se encontraba bajo inspección de la repartición, por la cual se pudo "detectar" que no contaba con las existencias de azúcares necesarias para respaldar sus deudas. A los pocos días, se rectificó y por resolución 48/70 restituye las cuotas de entrega de la compañía. Se trataba de una nueva insinuación de lo que estaba por venir. El martes 5 de mayo de 1970, el ministro del Interior de Onganía, Gral. Imaz, realizó una "gira" por la provincia, acompañado por el DNA Raúl Arechaga. Cuarenta vehículos se desplazaron

raudamente por la ruta 38 al sur, con fuerte custodia y hasta con un avión militar que patrullaba desde el aire. Arribaron a Villa Quinteros, donde se había cerrado el ingenio San Ramón, y en la serie de discursos un agente menor de los funcionarios denunció que los directivos de CAT eran “unos ladrones”, lo que mereció el comentario del ministro: “Habrá que tomar medidas”, para aludir a continuación a los “señores de horca y cuchillo” que pretendían mandar en la provincia... Acto seguido Arechaga exhortó a los cañeros a no aceptar los pagarés de la CAT, porque “no valen nada; de hecho, está en quiebra”: la ofensiva final había comenzado.

Estalla el “affaire del azúcar”, supuesto escándalo del siglo

El 11 de mayo, en Buenos Aires, Arechaga informó oficialmente que se había comprobado un “faltante” de 300.000 bolsas de azúcar en los depósitos del Puerto Madero pertenecientes a la CAT, sobre las 560.000 bolsas declaradas por la compañía el 15 de abril, y comunicó la situación al gobierno de Tucumán para que advierta a las instituciones de crédito de la provincia sobre la situación. Al día siguiente, Arechaga convocó al peridodismo en los galpones del dique 2 de Puerto Madero para exponer las “maniobras” realizadas por la CAT. Toda la cadena nacional de radiodifusión, los diarios capitalinos y la televisión anunciaron al país de inmediato, a grandes titulares, que se había descubierto la estafa del siglo, “El Affaire de la CAT”, el “Escándalo del Azúcar”. El 14 la DNA comunicó la inmovilización de todos los azúcares pertenecientes a la empresa, paralizando de hecho su movimiento comercial. El 15 de mayo la sede central de la CAT en Buenos Aires era allanada y ocupada por tropas federales. .

El 12, el Directorio de la CAT intentó su defensa mediante una solicitada que sólo quisieron publicar algunos diarios de Buenos Aires y de Tucumán,²⁰ denunciando a Jorge Peyceré, Secretario de Industria y jefe directo de Arechaga, por el acoso que sufría la firma, que ponía de manifiesto la continuidad en sus procedimientos, sus técnicas persecutorias y sus acusaciones fraguadas con las del equipo formado por Salimei, Galimberti y Pinali desde 1966. Denunciaron asimismo las severas presiones que los funcionarios nacionales ejercían desde tiempo atrás sobre las entidades crediticias de la firma, así como sobre los cañeros y los obreros, a fin de cerrar el cerco alentándolos con la idea de una toma de “posesión gratuita” de los ingenios de la CAT. Para el Directorio de la CAT, Arechaga había montado una “escena” en los depósitos de Puerto Madero que se apoyaba en cifras fraguadas y en aparatosas fotografías que nada demostraban. Devolvían por fin la gentileza al Ministro del Interior, afirmando que los “señores de horca y cuchillo” por él denunciados en Villa Quinteros no debían buscarse en Tucumán, sino en la Secretaría de Industria y Comercio Interior y en la red de funcionarios que le respondían en el atentado contra la economía de Tucumán y del país. La gente de la CAT sabía que se había descargado el “golpe final”, aunque todavía proclamaran que “Tucumán no será barrido del mapa económico-social del país para servir a los intereses del Norte”, y que “la CAT (...) no será arrasada”.

El Centro Azucarero Argentino, comandado por Arrieta-Blaquier, comunicó el día 15 de mayo su absoluto respaldo a los funcionarios del PEN, amonestando a los directivos de la CAT por pretender presentarse ante la opinión pública “como víctimas de la persecución de las autoridades, que obviamente no han hecho otra cosa que cumplir con su deber”. Su pronunciamiento -agregaban- sólo obedecía a la necesidad de

²⁰ La solicitada salió en *Noticias* y *La Gaceta* de Tucumán, y en *Correo de la Tarde* y *Clarín*, de Buenos Aires. *La Prensa*, *La Nación* y *La Razón* se negaron a hacerlo: ¿mejor prueba de la confabulación organizada? Emile Nadra, *Declaraciones ante el juez Dr. Julio Mauro Sosa*, Tucumán, 17 de noviembre de 1971.

“salvaguardar el prestigio de las empresas que representan, que no pueden ser alcanzadas por el desconcepto propio de episodios de la naturaleza del que acaba de trascender”. “Acababa de trascender”, pero los cínicos industriales corporativos, beneficiados por la política implacable del PEN, que había sumido en la ruina a su propia provincia, prejuizgaban sin que la justicia hubiese iniciado ninguna investigación.

La suerte de la CAT ya estaba echada, en realidad, pero se resistía a ser aniquilada. En un ensayo audaz y desesperado por encontrar apoyo “popular” frente a la ofensiva brutal del Poder central, Emile Nadra convocó a FOTIA y FEIA (federaciones de obreros y empleados de ingenio), pidiéndoles apoyo para evitar el cierre de las fábricas. Rápido y algo brutal, Martín Dip, abogado asesor de los gremios, exigió a cambio la entrega de la mitad del paquete accionario de la CAT. Nadra contraofreció el 40 por ciento, y acordaron. Pero los gremialistas sabían que el destino de la empresa no estaba ya en manos de sus dueños, sino del PEN, de modo que viajaron de inmediato a Buenos Aires, entrevistaron a Imaz, salieron mudos y, de regreso en Tucumán, anunciaron un “plan de lucha”: a todas luces, el ministro les anunció que la confiscación era cosa decidida, pero los habrá tranquilizado con la noticia de que habrían de compartir el botín en una sagrada alianza obrero-militar.²¹

Mientras tanto, el interventor-gobernador de la provincia, coronel Nanclares, se sentía atrapado en la misma situación que su conmlitón y antecesor en el cargo, el general Aliaga García. Al llegar como delegados a su lejana satrapía, los interventores de la “Revolución Argentina” eran, invariablemente, unos fieles creyentes del dogma sacarófobo, rápidos para ejecutar todos los castigos y “correctivos” que esa mala industria requería. Pero en cuanto comenzaban a mirar las cosas desde la provincia, las iniquidades del Poder central resultaban violentamente puestas en evidencia. Su rebelión, sin embargo, acababa prontamente en renuncia o retiro forzoso, y Nanclares seguiría pronto el camino recorrido por Aliaga. Pero en estas circunstancias iniciales del complot, cuando Arechaga difundió las primeras noticias del supuesto negociado, Nanclares convocó a los directivos de CAT para negociar una solución, porque el coronel temía lo peor: el cierre de tres nuevas fábricas y otros miles de desocupados lanzados al arroyo, y él a cargo del polvorín. De Buenos Aires llegaron Aldo Rodríguez y Kohan y ofrecieron, ya que se acusaba a la CAT de haber vaciado sus galpones y de no disponer del azúcar que era el respaldo de sus créditos, tomar como garantía, hasta tanto la investigación aclarase las cosas, todos los bienes de la compañía, incluidas sus tierras y fábricas. Pero Onganía, Peyceré y sus agentes no pensaban ya en ninguna salida negociada, de manera que el gobierno provincial fue obligado a rechazar la oferta de la CAT. El papel del gobierno provincial no era buscar salidas que dieran por tierra con los planes del PEN, sino sumarse a sus objetivos mediante el asedio judicial contra la firma.

Por otra parte, el aislamiento de la CAT era cada vez más completo: la nueva directiva de los cañeros nucleados en UCIT, que se había encaramado en la conducción del gremio en octubre de 1969 con el aliento oficial, desplazando al díscolo Gaspar Lasalle, reclamaba ante Nanclares la “intervención total de la CAT” y la separación de sus directivos. FOTIA y FEIA, a su vez, anunciaban conjuntamente que, de confirmarse la intervención y expropiación de la empresa, “ello causaría satisfacción a las organizaciones obreras azucareras”. Que la CAT había sido condenada a muerte se sabía ya en todo Tucumán, pero en Buenos Aires el Director Arechaga, interrogado por los periodistas, declaraba no saber nada acerca de la expropiación de la que toda la prensa del país se hacía eco, agregando, muy candorosamente, que su repartición lo único que hizo fue “investigar” irregularidades de la Compañía, para añadir, de

²¹ *Periscopio* 36, 26 de mayo de 1970, pg. 13; *Panorama* 161, 26 de mayo de 1970, pg. 12

inmediato, que la misma se encontraba incurso en una evasión que alcanzaría a los 900 millones de pesos. El monto de esa supuesta deuda subía en boca de los funcionarios nacionales y provinciales con una velocidad pasmosa: los 900 millones pronto se transformaron en 1.300 y luego en 2.000 millones de pesos.

El 21 de mayo, Julio César Cueto Rúa, que ejercía la Presidencia de la CAT desde los convenios de 1967, convocó a los periodistas a su estudio en Corrientes 456 de la Capital Federal, y el país se enteró de que, en realidad, la CAT ya no tenía presidente: su declaración escrita afirmaba que había renunciado al cargo el 29 de abril... Su proverbial “retirada” no fue tan deshonrosa como parece a primera vista, sin embargo, porque este curioso presidente, un “mediador” entre el régimen militar y los “comunistas” de la CAT, durante los tres años de convivencia en la empresa, con sueldo suculento y auto propio, y, tras haber conocido en detalle la actividad de los ingenios en la Provincia y haber sufrido desde el otro lado las infinitas intrigas de los funcionarios nacionales, modificó sustancialmente su apreciación de las cosas. No era ya el sacarófobo de 1966, sobre todo porque, pese a su decidida predilección por el modelo neoliberal que no se cansaba de propagandizar desde las columnas de *Análisis*, Cueto Rúa era un *liberal*, no un *neoliberal* a secas, como sus amigos Krieger, Martínez de Hoz y otros. Esto significa que para Cueto Rúa el liberalismo consistía, en primer lugar y ante todo, libertad política y civil, vigencia de la constitución (por cierto que dispuesto a transacciones, según revelaban sus colaboraciones en *Análisis*) y un marco jurídico que no se podía violar. Los neoliberales, en cambio, pensaban y actuaban (como hoy) con igual estilo que los católico-fascistas, con quienes por ese motivo convivían pacíficamente en el gobierno: las instituciones para ellos carecían en absoluto de importancia, y en cuanto a las libertades, constituían un franco peligro. Esto distanciaba a Cueto Rúa de Onganía, pero también de Krieger, de Martínez de Hoz, de Arrieta y su yerno Blaquier, como del puñado de azucareros tucumanos para quienes bien valía la dictadura si les permitía expandir sus empresas y capturar la parte del león en el negocio azucarero, aún a costa de la provincia, amparados en las maniobras fraudulentas de un gobierno ilegítimo.

De manera que la declaración de Cueto Rúa contenía una completa condena de la política del PEN porque, como sostuvo, las dificultades de la CAT, como de toda la industria tucumana, obedecían “principalmente a la política seguida por el Secretario de Industria y Comercio”, es decir, el señor Raúl Peyceré, cuyo accionar había provocado deliberadamente la caída del precio del azúcar y había impuesto la asfixia financiera sobre los ingenios tucumanos, negándose de manera discriminatoria a otorgar a sus fábricas iguales condiciones que al resto de la industria argentina, favorecida, por ejemplo, por la ley de “rehabilitación industrial”, dictada en esos años por el gobierno. Cueto Rúa confesaba en su declaración que Peyceré traía ya de tiempo atrás el propósito declarado de incautar los ingenios de CAT, propósito que le había manifestado descaradamente durante el curso de una entrevista en su propio despacho, en enero de ese año, con el insostenible argumento de que la CAT adeudaba la segunda cuota del plan convenido en 1967, de consolidación de sus pasivos: Cueto Rúa le objetó en esa ocasión que tal situación no distinguía a la CAT de ningún otro ingenio del país, de modo que de ser así, Peyceré debía proceder a estatizar toda la industria azucarera argentina. Acusó asimismo al Secretario de Industria de manejos irregulares, como que no daba a conocer los balances de los ingenios Arno, de Santa Fe, y Bella Vista de Tucumán, a los que había intervenido tiempo antes, los que tampoco cumplían con sus obligaciones impositivas ni con las leyes previsionales. Reclamó que la Justicia fuese la encargada de dictaminar si la CAT había incurrido o no en irregularidades, “que no le constaban”, y concluyó interrogando al país: “¿quién juzgará la responsabilidad de la

Secretaría de Comercio e Industria, cuyas medidas agudizaron las tensiones sociales, agravaron los problemas económicos y desconocen las angustias y penurias de nuestros trabajadores, productores y empresarios de las provincias del interior, y llevan a la desocupación a cientos de miles de nuestros conciudadanos?”.

Hoy disponemos de la respuesta al interrogante de Cueto Rúa: sencillamente, nadie. Al contrario, Peyceré dispuso pocos días más tarde, el 17 de junio de ese año, por Resolución 225 de su secretaría, la cesantía de todos los jefes de sección de la DNA, empleados con más de 20 años de servicio, porque se habían constituido en testigos molestos del burdo complot contra la CAT, ejecutado bajo su dirección por Arechaga. Este último, por otra parte, sería “renunciado” en esos días y premiado de inmediato con la vicepresidencia de CONASA, la flamante empresa estatal erigida sobre los despojos de la CAT. En la DNA le sucedió el señor Ricardo Entrena, cuyos antecedentes consistían en que provenía de los servicios de información del Estado: si no entendía mucho de azúcares, sin duda sería experto en “comunistas”.

Se comprende que la CAT fuera derrotada y aniquilada, porque representaba un estorbo para un vasto plan en marcha, que consistía en eliminar de una buena vez todo ese ruidoso y peligroso mundo de cañeros, obreros sindicalizados, pequeños y medianos industriales, que conformaba el mundo azucarero de Tucumán: un “chicaje” alborotador, en el cual hasta los empresarios parecían comunistas. Eliminar, en suma, una variante local de “capitalismo realmente existente”, una estructura productiva con un alto grado de distribución, no monopolizada, para sustituirlo con otro “modelo”, el de Arrieta-Blaquier y Patrón Costas y de los Paz de Tucumán. Un modelo que se impuso por la fuerza, en el terreno político-militar, según hemos podido apreciar: lo llevaron a cabo Krieger y Martínez de Hoz, quien presidía en esos años el CARNA (Centro Azucarero Regional del Norte Argentino, apenas un nombre de fantasía para representar en Buenos Aires, *locus* del poder, a los dos industriales de Salta y Jujuy). El absoluto aislamiento en el que la CAT fue arrinconada y aniquilada, cuyas razones socio-políticas y económicas hemos interpretado páginas atrás, fue examinado del siguiente modo por Emile Nadra:

“En el mundo azucarero argentino hay empresas que consideran la actividad como privativa de un grupo selecto, casi un título de nobleza, vedado a otras personas. Empresarios, a veces candorosos y a veces sin prejuicios, para quienes los principios de la libre empresa son útiles en tanto y en cuanto facilitan el libre albedrío de sus actos y de sus intereses. Para ellos la libre empresa no debe regir para algunos competidores. A éstos, parece lícito desbancarlos, intervenirlos y expropiarlos, e inclusive perseguirlos y encarcelarlos, si la coyuntura política se presta para ello. Es ésta, realmente, una interpretación muy original de la libre empresa. El Estado es llevado al papel de un perro guardián, atado con cadenas, que se suelta sólo para atacar a los supuestos intrusos”.²²

CODA:

JUSTICIA E IMPUNIDAD EN LA AGONIA DE ARGENTINA

El cerco judicial y represivo

En cuanto el tandem Peyceré-Arechaga lanzó su operativo contra la CAT, se estableció un vasto cerco policial y judicial para consumar la aniquilación de la empresa

²² Nadra, Emile. *Consideraciones en torno al problema azucarero nacional y particularmente al de la Provincia de Tucumán*, Buenos Aires, Mimeo, agosto de 1970. (El escrito no lleva su firma).

en la figura de todos sus directores. El Banco de la Provincia de Tucumán (BPT) instruyó a su representante legal en Buenos Aires para iniciar querrela criminal contra Emile Nadra, el capitán Solá, Aldo Rodríguez y Jacob Goransky en los tribunales federales, por 750 millones de pesos moneda nacional, y otro tanto hizo la Caja Popular de Ahorros de la provincia, que ya había iniciado demanda en abril, ahora retomada. El fiscal de la provincia, a su vez, querellaba ante la justicia de Tucumán por defraudación a Emile Nadra, Aldo Rodríguez y Guillermo Kohan, directores de CAT, pero también a Rodolfo Terán, Hugo Terán Viaña y Hugo López Alurralde, cañeros y ejecutivos de los ingenios de la CAT, quienes habían sido incorporados a la gestión tras la reapertura de 1967. Los directores cañeros del ingenio La Trinidad tuvieron también su querrela por supuesta desaparición de 100.000 bolsas de azúcar: a partir de la “denuncia” de Arechaga, la prensa del país multiplicó las escandalosas desapariciones de azúcares de la CAT, de modo que la República se enteraba cada día de nuevos robos. La CAT habría vaciado depósitos en la Capital Federal, en Bahía Blanca, en Córdoba, en Mendoza, en numerosas otras ciudades del interior. ¡Era la mayor estafa empresarial en la historia económica del país!.²³ En agosto, la DGI demandaba a Nadra y Rodríguez por otra supuesta defraudación, esta vez por compra simulada de azúcar y venta ilegal de automóviles de la firma. Todavía en noviembre de ese año, el diligente fiscal Lazzo seguía acumulando querellas contra los altos y medios directivos de la CAT, los empleados y decenas de cañeros de la provincia.²⁴ En el golpe final contra la CAT, el PEN y el gobierno provincial, decididos a aniquilarla, arrojaban lodo por doquier y sin medida. Es de imaginar el azoro de aquellos cañeros, quienes nunca habrían sospechado la virulencia que podía alcanzar la ofensiva de los funcionarios del PEN, aplastados bajo una lluvia de demandas criminales, arrestados y enjuiciados. Otro juez de la provincia, Juan Carlos Salas, ordenaba la captura de Nadra, Rodríguez, Solá y otros empleados de la firma en Tucumán, por nuevos azúcares supuestamente desaparecidos en el ingenio Santa Rosa y en Monteros. Fue una verdadera descarga de fusilería jurídica, aplastante y torpe, de tan excesiva. El inefable -e infaltable- Exequiel Avila Gallo prestaba su concurso al infame complot, reclamando de la justicia la intervención contable de la CAT: se puede pensar que aquella vez actuó desinteresadamente y por vocación, dado se carácter de “cruzada contra el comunismo”.

En Buenos Aires, en la madrugada del 22 de mayo, al día siguiente de su conferencia de prensa, Cueto Rúa, el capitán Solá, Tedín Uriburu, Llobet y Figueroa Alcorta eran sacados de sus domicilios y trasladados a las dependencias de Defraudación y Estafas de la Policía Federal: Peyceré, ex-militar devenido tecnócrata, demostraba que no vacilaría ni se detendría ante nada. En la noche de ese día, Peyceré informaba ante Onganía y el gabinete en pleno que la expropiación había sido decidida por “la inexcusable obligación del Estado de proteger el bien social”, y que, en tal sentido, se había recurrido al “principio de subsidiariedad del Estado”. Un individuo interesante este Peyceré, sin duda, y ocurrente: la “subsidiariedad” significaba hacer del estado una máquina de intriga y de legalidad invertida. Emile Nadra y Aldo Rodríguez, como Jacobo Goransky, no fueron encontrados; la prensa sacarófoba hacía circular la especie de que Nadra y Goransky, “verdaderos responsables del desfallo y prófugos de la justicia”, gozaban plácidamente de sus riquezas en Suiza.²⁵ El 26 de mayo, sin embargo, los dos primeros, mediante un escrito presentado ante la justicia, asumieron toda la responsabilidad en su calidad de directores ejecutivos y apoderados de la firma,

²³ *Ahora*, 30 de junio de 1970.

²⁴ *La Gaceta*, 8 de diciembre de 1970.

²⁵ *Confirmado* 262, 24 de junio de 1970.

con lo cual abrían el camino para que los restantes miembros del Directorio quedaran fuera de la causa.

Onganía, tras una segunda oleada de rebelión popular que siguió al “Cordobazo”, cayó el 8 de junio de aquel año, cuando los funcionarios azucareros del PEN todavía no habían terminado de deglutir los ingenios de la CAT. Tan evidente era el escándalo, que el militar que le sucedió, el general Levingston, apenas asumido, ordenó que el estado desistiese de la demanda judicial planteada contra el Directorio de la CAT. Poco después, el juez Leopoldo Isaurralde dictaminaba que la Dirección Nacional de Azúcar había procedido con “ligereza” en la verificación de los azúcares de la compañía. Pero ¿quién le quitaría lo bailado a Peyceré y Arechaga? Este último había sido ya transferido al directorio de la flamante CONASA: la historia de esta corporación, formada con los bienes usurpados a la CAT, es otra historia de delitos oficiales, que no habremos de contar aquí.

El “affaire” en la justicia

Pero quizá el lector se pregunte a esta altura: ¿qué fue verdaderamente aquel “affaire del azúcar”, esa gran estafa del siglo, aquel supremo ejemplo de la maldad de los industriales tucumanos? Y también: ¿porqué he calificado de “complot” y de “fabricación de un negociado” a las maquinaciones de Onganía, Peyceré y Arechaga contra la CAT? Bien, paso a exponer mis razones. La metralla judicial lanzada por Peyceré y todos sus agentes no pudo menos que producir una marea de expedientes, averiguaciones, careos, testimonios, pesquisas, etc., y de todo ello hubo resultados. ¿Debemos otorgar algún crédito a las conclusiones de la justicia? Un argentino de hoy se encuentra predispuesto a no darle ningún crédito, y no sin razón. Pero antes de cerrar esta crónica con la exposición abreviada de los dictámenes judiciales, expongo dos consideraciones: (1) la justicia de la época, como poder independiente, había comenzado a ser aplastada, amansada y corrompida por la dictadura de Onganía: numerosas cortes y jueces de provincia fueron apartados brutalmente, al menor gesto de independencia y de rectitud moral y profesional. Pero la corrupción generalizada del poder judicial sería una tarea de años, de más de una dictadura y, particularmente, de la democracia dictatorial inaugurada por el señor Menem. En resumen, existían aún jueces dignos de ese nombre; (2) pero si el argumento expuesto no es suficiente ni probatorio, cabe razonar que las pruebas emergentes de aquellos procesos fueron, como mínimo, más sólidas que las acusaciones nunca probadas de los funcionarios de la dictadura y de sus propagandistas en los medios de comunicación. Claro que el lector está en libertad de escoger el fundamento de sus creencias, o de tenerlas sin ninguno.

Antes de mediados de aquel año 1970, los jueces Black e Isaurralde dispusieron la falta de méritos para procesar a los directores de la CAT, excluyendo los casos de Nadra y Rodríguez, que no habían sido detenidos. Conviene destacar que el fallo de Isaurralde, del 8 de julio de 1970, estableció que la Policía Federal se había extralimitado en sus procedimientos, al remover cielo y tierra “en busca de mercaderías cuya presentación no era exigible hasta septiembre, o diciembre de 1970”, aunque resultaba claro que la Policía no había actuado “motu proprio”, sino por iniciativa de la Secretaría de Industria y Comercio Interior y su dependencia la DNA, o sea los señores Peyceré y Arechaga. ya que las partes supuestamente afectadas (es decir, los Bancos de la Nación, o el Banco Mercantil, principal acreedor de la CAT) no habían presentado ninguna demanda contra los acusados.²⁶ En la causa llevada por César Black, el fiscal D’Albers informó al juez que el Banco Nación, como acreedor de CAT por los azúcares prendados y supuestamente desaparecidos, “declara no tener conocimiento de que exista

²⁶ *Confirmado* 265, 15 de julio de 1970, pg. 22.

faltante de azúcar con prenda a su favor”, por lo que -añadía el fiscal- “se desdibuja el ilícito penal”, y al no encontrarse vencida la obligación, y dado que el acreedor no exigió ninguna cancelación anticipada, “resulta patente con diaphanidad que las aprehensiones realizadas han estado signadas por la precipitación” (fs. 398 de la causa 325/1970, Tribunales de la Capital Federal). Añadía D’Albers que la actitud policial violaba las garantías constitucionales de los acusados por cuanto no hubo *in fraganti* ni supuesta culpabilidad. Con tales fundamentos, el juez César Black decidió dejar sin efecto el procesamiento de los directivos de la CAT, al mismo tiempo que condenó la “censurable precipitación” de la repartición policial. La sentencia de Black ponía fin a todo proceso contra el Directorio de la CAT, a excepción de Nadra y Rodríguez, que no habían sido apresados.

No es preciso ser lego sin embargo, para advertir que los considerandos de Isaurralde y Black exculpaban a éstos últimos de hecho. No lo entendieron igual modo ciertos jueces, como que en la provincia de Tucumán, en una de las infinitas querellas que envolvieron durante años a los directivos menores y mayores de la CAT, el juez Lohezic, el 24 de julio, cuando ya se habían producido las sentencias recién extractadas, dictaba orden de captura contra Nadra y Rodríguez, a quienes declaraba “principales responsables de la defraudación que costó a la provincia más de mil millones de pesos”.²⁷ Pero si los jueces establecían una cosa, el PEN pensaba otra: luego de la sentencia exculpatoria de Black, apresó nuevamente a los directivos de la CAT en Buenos Aires en el mes de agosto, los colocó a disposición del PEN en virtud de su arbitrariedad dictatorial y se dió el gusto de que Cueto Rúa pagase por sus atrevidas declaraciones de mayo con dos meses de cárcel. En cuanto a Figueroa Alcorta, ex presidente de la CAT y miembro de su directorio, quien, como diría Emile Nadra en una de sus declaraciones, era el nieto “del único ciudadano que ocupó la presidencia de los tres poderes en la historia argentina”, como no resistía la prisión prefirió la opción del exilio.

En cuanto a Emile Nadra y Aldo Rodríguez, su juicio tuvo lugar en 1971, cuando el segundo fue detenido por la Policía Federal y Nadra consideró que contaba con mínimas garantías, una vez destronados Onganía, Peyceré y Arechaga (este último habría de ser exonerado y procesado por su desempeño en CONASA). Los juzgó el juez Julio Mauro Sosa, en los Tribunales de Tucumán.²⁸ Su sentencia, con fecha del 11 de noviembre de 1972, sobreyó a Nadra y Rodríguez, asentando que llegó a tal decisión luego de dos años de actuación y habiendo formado la causa catorce cuerpos de expedientes, con más de tres mil hojas que registran las actuaciones, testimonios, confrontación de pruebas, peritajes y cotejos documentales. El juez Sosa estableció que: (1) la demanda no fue iniciada por los acreedores, supuestos afectados, sino por la DNA, repartición del PEN; (2) que al tiempo de inicio de la querella, las deudas de los acusados con el BPT, la Caja Popular y el Gobierno de la Provincia no se encontraban vencidas, así como que el Banco Nación y el Banco Mercantil, acreedor mayor de la empresa, no habían formulado demanda alguna; (3) sobre el tema de fondo de los azúcares faltantes, establece el juez que las fotos y secuencias presentadas por Arechaga como prueba de la estafa, donde las estibas en el depósito de Puerto Madero aparecían con “huecos”, habían sido tomadas el día 15 de mayo, nueve días después de que tales depósitos estuvieran bajo control absoluto de la DNA, repartición que Arechaga dirigía,

²⁷ *La Gaceta*, 25 de julio de 1970.

²⁸ En el proceso que les inciera la DGI fueron sobreyados en julio de 1974. El fiscal actuante en dicha causa señaló que en cuatro años no habían aportado prueba alguna ni el PEN, ni la intervención de la CAT impuesta en 1970, lo que ponía de manifiesto la inconsistencia de la demanda. *La Gaceta*, 31 de julio de 1974.

puesto que los había intervenido el día 6 de mayo, y desde ese momento ningún directivo de la CAT pudo acceder a los mismos; (4) que la DNA había efectuado inspecciones en dichos depósitos en numerosas oportunidades a lo largo del mes de abril de 1970, siendo las últimas los días 28, 29 y 30 de abril, y que en todas ellas no informó de ninguna irregularidad ni faltante; (5) que, no obstante, Arechaga denunció faltantes el día 13 de mayo, donde declaró que sólo existían 278.000 bolsas de un total de más de 560.000, y que redujo la primera cifra, en declaraciones, a solamente 108.000 bolsas.

¿Qué conclusiones desprendió el juez Sosa luego de tales consideraciones? Pues que “aparece a todas luces una verdadera maniobra dolosa, que consiste en haber hecho desaparecer más de 400.000 bolsas de azúcar de los depósitos, maniobra que no puede imputarse en forma alguna a la CAT, por lo que declaramos que una vez terminado este proceso se investigue a los funcionarios de la DNA”.

El “affaire” del siglo, en suma, consistió en que el PEN y los funcionarios encargados de la política azucarera nacional llevaron a la quiebra a la empresa azucarera tucumana más importante de la época y, de paso, se robaron cuatrocientas mil bolsas de azúcar. Pero su mayor triunfo consiste en que la intriga que llevaron a cabo, que arruinó la economía de Tucumán y que formó parte de la obra de destrucción de nuestro capitalismo realmente existente, hegemoniza la memoria histórica de los argentinos. La aniquilación de la CAT dio origen a un juicio por parte de Emile Nadra y de los accionistas de la empresa, que ya dura 33 años y aún no ha concluído. Demandaron, sencillamente, el pago de la indemnización correspondiente por la confiscación sufrida. La Corte Suprema de Justicia falló a su favor en 1989, pero hasta hoy no cobraron, cuando la mayoría de los accionistas de la CAT ya han muerto. Cada vez que el tema sale a luz, una “unión sagrada” de políticos, sindicalistas, periodistas y burócratas del PEN condena su reclamo y se amagan “comisiones especiales” en las cámaras (se constituyó una, en Diputados de la Nación, que no concluyó en nada): pagarles, dicen al país, constituiría una “una nueva estafa”. ¿No es esto una memoria histórica invertida, que hace de las víctimas los perpetradores del crimen?

MORALEJA

Una anécdota suele ser aquello que consideramos como un suceso circunstancial e irrelevante, un hecho quizá curioso, o divertido. La anécdota que aquí se contó no tiene ninguno de esos rasgos. Pero tiene una profunda significación vinculada con el país que acabamos por construir o, mejor dicho, por destruir. ¿Es legítimo cerrar la crónica con una moraleja? ¿Porqué no? La anécdota no enseña mucho más que lo que los argentinos ya sabemos: que nada es más fácil en este país que delinquir desde el poder. El abuso ilegítimo del poder está consagrado por nuestra historia. Otorga riqueza, prestigio y un seguro retiro a la vida privada. ¿Qué es hoy de Peyceré, de Pinali, de Arechaga, de tantos otros? ¿Viven, han legado a sus hijos un buen pasar, bienes, comodidad, lujos?

¿Acaso hubo, al fin, un “affaire del azúcar”? Sí lo hubo, al menos uno cuyas pruebas quedaron registradas en los expedientes judiciales: fue un “affaire” de los funcionarios del PEN, que hicieron desaparecer 400.000 bolsas de azúcar y presentaron como ladrones a quienes fueron, en realidad, sus víctimas. ¿No es el crimen perfecto? Sospecho que la historia reciente del país se encuentra regada de historias similares. Uno de los jueces consideró que las pruebas eran tan concluyentes como para recomendar el procesamiento de los funcionarios. Pero ese juicio nunca llegó. Dice Eden Phillpotts, por medio del inspector Foster, que *“de nueve casos entre diez, los hechos evidentes son los verdaderos, aunque ésta pueda parecerle una observación*

trivial".²⁹ El precepto no rige con comodidad en nuestro país, donde la evidencia no es la verdad, pero lo trivial es la justicia.

¿Puede hablarse de "capitalismo", de eficiencia y de competitividad (la "impostura economicista") en un país carente de toda juricidad? Sí, puede hablarse. Porque el capitalismo es, lo digo una vez más, un concepto metafísico, que alude tanto a la "economía" de los piratas del Caribe en los siglos XVI y XVII, como a las industrias Krupp o Bayer de la Alemania nazi, alimentadas con la mano de obra de los campos de concentración, como al curioso (y en 1976, siniestro) enclave del ingenio Ledesma, en la provincia de Jujuy, como a los ingenios tucumanos que alguna vez fueron de la CAT. Sólo que las reglas y los modos de competir, y por lo tanto de ser "eficientes", varían notablemente de uno a otro. El "capitalismo", a estar por el uso universal del término en los últimos cien años, no es más que una palabra para nombrar la sociedad que cada comunidad desea y se propone tener, de lo que cabe excluir, obviamente, los experimentos alternativos caracterizados bajo el nombre de socialismo.

Roberto Pucci
Tucumán, junio de 2003

²⁹ Phillpotts, Eden. *El señor Digweed y el señor Lumb*, Buenos Aires, Emecé-Séptimo Círculo, 2003.